

Doctor

EDISON FIERRO PANTEVEZ

JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA:	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
PROCESO:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	760013333019-2023-00247-00
DEMANDANTE:	KLEYDER ANDRES MORALES CERON Y OTROS
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTRA
LLAMADA EN GARANTÍA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, conforme se acredita con la escritura pública adjunta que contiene el poder de representación, encontrándome dentro del término legal procedo en primer lugar a CONTESTAR LA DEMANDA impetrada por **KLEYDER ANDRES MORALES CERON Y OTROS** en contra del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTRA**, y en segundo lugar a CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado por **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, en virtud de la **Póliza de Responsabilidad Civil Nro. 1507222001226 certificado 0**, cuya vigencia corrió entre el 30 de abril de 2022 y el 01 de diciembre de 2022; para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, así como las que contiene el llamamiento en garantía que nos ocupa, en los siguientes términos:

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

El despacho mediante Auto s/n del 07 de mayo de 2024 resolvió admitir la demanda de reparación directa. Por su parte el llamamiento en garantía a mi procurada fue admitido por el despacho mediante Auto s/n del 20 de febrero de 2025, notificado por estado el 21 de febrero de 2025 y personalmente en la misma fecha, motivo por el que es correcto afirmar que nos encontramos en término para contestar la demanda y el llamamiento en garantía, atendiendo a que el artículo 225 del CPACA establece que la llamada en garantía cuenta con quince (15) días para contestar la demanda y el escrito del llamamiento en garantía, término que se comienza a contabilizar tras dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico de la notificación personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 199 y 205 del CPACA¹. En el caso concreto, el término se computa de la siguiente manera: (i) de la notificación electrónica los días 24 y 25² de febrero de 2025; (ii) traslado del llamamiento, iniciando el 26 de febrero de 2025 y continuando los días 27 y 28 de febrero de 2025, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y finalizando el martes 18 de marzo de 2025. Por lo anterior, es correcto afirmar que este escrito se presenta dentro del término procesal previsto.

¹ Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: (...) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

² Los días sábado 22 y domingo 23 de febrero no son días hábiles por lo que no son objeto del conteo

CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO PRIMERO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón es padre de los menores referidos en el “hecho”, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia de sendas copias de registros civiles de nacimiento que pueden confirmar la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón es compañero permanente de la señora Góngora Ortiz, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia de una declaración extrajuicio que hace referencia a lo aseverado, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011

FRENTE AL HECHO TERCERO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón es hijo del señor Héctor Marino Morales Velásquez, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia una copia de registro civil de nacimiento que puede confirmar la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO CUARTO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si las personas mencionadas en el punto conforman una familia en las condiciones en las que describe, por no ser ello del resorte de las actividades de la compañía de seguros. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este “hecho”.

FRENTE AL HECHO QUINTO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el 27 de septiembre de 2022, a las 07:05 horas de la mañana, el señor Kleyder Andrés Morales Cerón, se desplazaba en una motocicleta de placa NCZ-61E; por la Carrera 1 entre Calles 27 y 28 en sentido occidente-oriente de la ciudad de Santiago de Cali. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido

en este “hecho”.

FRENTE AL HECHO SEXTO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual, me pronunciaré de manera independiente.

A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón se cayó mientras transitaba por la Carrera 1 entre Calles 27 y 28, toda vez que es una situación que no es del resorte de las actividades de la compañía de seguros, en este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este “hecho”.

No es un hecho que el demandante haya caído en un hueco que se encontraba sin señalización legal o reglamentaria, pues ello constituye el objeto de la controversia de esta litis, en tal sentido le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este “hecho”.

FRENTE AL HECHO SÉPTIMO: Si bien este punto es una reiteración de lo contenido en el anterior, se debe insistir en que no es un hecho que el demandante haya caído a causa de un hueco que se encontraba en la Carrera 1 entre Calles 27 y 28, pues ello constituye el objeto de la controversia de esta litis, en tal sentido le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este “hecho”. Sin embargo, debe dejarse por sentado desde ahora que el punto pretende ser corroborado con una imagen “*tomada de Google Maps*” sobre la cual no se tiene información alguna sobre la fecha de toma, por lo que es claro que no se puede asociar directamente al motivo del siniestro que alega la parte demandante.

FRENTE AL HECHO OCTAVO: Si bien este punto es una reiteración de lo contenido en el punto “6”, se debe insistir en que no es un hecho que en la Carrera 1 entre Calles 27 y 28 no hubiese señales de tránsito que indicarán la existencia de un hueco, pues ello constituye el objeto de la controversia de esta litis, en tal sentido le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este “hecho”.

FRENTE AL HECHO NOVENO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

No es un hecho que el accidente se haya producido por causa de una falla en el servicio, ello corresponde a una apreciación subjetiva que realiza el togado defensor de los intereses de los demandantes y, en consecuencia, le corresponderá a tal extremo procesal, acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código

General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

A mi procurada no le consta directa ni indirectamente si el señor Morales Cerón sufrió lesiones físicas, por no ser ello del resorte de las actividades de mi representada, sin embargo, obra en el expediente copia de una historia clínica que podría estar relacionada con la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DÉCIMO: Es cierto parcialmente, pues el ente territorial sí suscribió el contrato de seguro representado en la **Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226** certificado 0, cuya vigencia corrió entre el 30 de abril de 2022 y el 01 de diciembre de 202, sin embargo, no es cierto que por ese único motivo se encuentren amparados todos los riesgos, pues ello dependerá del cumplimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza de seguro.

FRENTE AL HECHO DECIMOPRIMERO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Kleyder Andrés Morales Cerón tenía 35 años al momento de los hechos, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia una copia de registro civil de nacimiento y una copia de documento de identificación que pueden confirmar la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOSEGUNDO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Kleyder Andrés Morales Cerón al momento de los hechos se desempeñaba como supervisor eléctrico, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia una copia de certificación expedida por Grupo Proyectos Especiales S.A.S. la cual puede confirmar la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia.

No es cierto que el señor Kleyder Andrés Morales Cerón devengará la suma a que se hace referencia en el punto (\$2.117.172) pues la certificación así lo indica, se debe recordar que al tenor del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no constituyen salario “(...) lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes”, por lo tanto, es un yerro conceptual considerar, que lo recibido como auxilio de transporte y el auxilio de rodamiento constituyen salario y que son valores que pueden usarse para calcular su total, pues el primero debe ser usado exclusivamente para dirigirse de la

empresa a la casa y viceversa y el segundo debe ser usado para realizar actividades laborales siempre que el vehículo sea propio del trabajador, máxime cuando en el plenario no obra prueba de que en el contrato interpartes se haya pactado la inclusión de dichos valores como constitutivos de salario, en consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOTERCERO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón tuvo una incapacidad en el lapso mencionado en el punto, por no ser ello del resorte de la entidad aseguradora, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia de una copia de historia clínica que refleja una situación diferente, pues en todo el documento sólo se soportan las siguientes incapacidades:

27 de septiembre de 2022: 30 días

INCAPACIDADES MEDICAS GENERADAS				
No. EVOLUCION	OBSERVACION DE LA INCAPACIDAD	TIPO DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	FECHA DE EMISION
6524023		Incapacidad por Accidente de Tránsito	30	27/9/2022

11 de noviembre de 2022: 7 días



Ahora bien, debe dejarse por sentado que más allá de inexactitud del tiempo que supuestamente tuvo de incapacidad el demandante, se debe atender que la existencia de la historia clínica no prueba en ningún sentido la responsabilidad de las entidades demandadas, así como tampoco que ello haya inferido un detrimento monetario, pues debe tenerse en cuenta que en cualquier medida, la remuneración por el tiempo de dichas incapacidades debía asumirlo en conjunto tanto el empleador por la ARL y eventualmente la EPS, por lo que no hay lugar a considerar que en el caso existe una pérdida económica si es que se llega a demostrar la incapacidad, la cual como se dijo, no está sustentada en los términos que se manifiestan en el “hecho”, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia.

FRENTE AL HECHO DECIMOCUARTO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Morales Cerón se encuentra en proceso de calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cali, por no ser ello del resorte de la entidad aseguradora, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda no se observa documento alguno que haga referencia a tal realidad. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

No es un hecho que el cálculo de la gravedad de las lesiones se pueda estimar en un 25%, pues ello resulta abiertamente contradictorio toda vez que, si como bien se indica en el punto, el señor Morales se encuentra en proceso de calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cali, será esta y no otra la encargada de determinar si existe una pérdida de capacidad, y cuál sería su porcentaje, por lo que resulta evidente que la manifestación se trata de una apreciación subjetiva del apoderado de los demandantes con la que pretende justificar las operaciones aritméticas reflejadas en el aparte de las pretensiones. En tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia.

FRENTE AL HECHO DECIMOQUINTO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si los demandantes se han visto expuestos a las situaciones descritas en el punto, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda no se observa material probatorio alguno que haga referencia a tal situación. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOSEXTO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si los demandantes se han visto expuestos a las situaciones descritas en el punto, sin embargo, desde ya se debe manifestar que no resulta coherente la afirmación en tanto se sugiere que dada la afectación física temporal del señor Kleyder Andrés Morales Cerón, se generó una imposibilidad física para cada uno de los demás miembros de la familia, pues no se aclara que dichas situaciones se hayan generado por el conjunto y no por la individualidad de cada ser, aunado a ello dentro de los anexos de la demanda no se observa material probatorio alguno que haga referencia a tal situación. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOSÉPTIMO: No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado de los demandantes respecto de lo que él considera ha sido un cambio en las condiciones de vida del señor Morales Cerón. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOCTAVO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si los demandantes han sido indemnizados por la entidad convocada (o entidades convocadas), sine embargo es claro que no mientras no exista la obligación para las pasivas de proceder a actuar de esa manera, ello no será puesto que los hechos narrados en la demanda son aún objeto de debate

y será un escenario judicial el que determine si existe responsabilidad o no y en qué medidas, motivo por el cual es irrelevante lo manifestado en el hecho, y en cualquier medida, corresponderá a la parte actora demostrar si es procedente o no algún indemnización.

FRENTE AL HECHO DECIMONOVENO: No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado de los demandantes respecto de lo que él considera han sido los sentimientos de sus poderdantes, sin embargo, debe dejarse por sentado desde ya que ni si quiera se pretende insinuar el motivo por el cual las personas han sufrido situaciones como el miedo o las referidas en el punto. En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer ellas de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. Lo anterior, comoquiera que ni la responsabilidad de mi representada ni la de su asegurada se estructuró, toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta falla en el servicio, como del daño antijurídico y en especial del nexo de causalidad entre los dos últimos elementos mencionados. En el *sub-lite*, la parte demandante no ha cumplido con ello, lo que inviabiliza la declaratoria de responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, me referiré a cada una de las pretensiones expuestas en el escrito de la demanda, de la siguiente manera:

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la declaración de responsabilidad patrimonial y extracontractual pretendida en razón a que: i) No existe ningún elemento fáctico, jurídico o probatorio que permita establecer que, por parte de la demandadas se haya presentado una conducta omisiva, negligente o imprudente que haya ocasionado el daño que aquí nos convoca; ii) La parte actora no ha acreditado que en el sitio de los hechos se haya presentado una falla en la malla vial o falta de señalización para el momento de los hechos; iii) Los demandantes no han demostrado eficientemente que la causa determinante del accidente de tránsito aludido haya sido justamente una anomalía en la malla vial o una falta de señalización, pues no ha allegado elementos de prueba idóneos, pertinentes y conducentes que permitan determinarlo; iv) La parte actora no ha acreditado, en primera medida, si existe efectivamente una pérdida de capacidad laboral de la víctima y consecuentemente tampoco han demostrado en qué porcentaje se presenta dicha pérdida; v) Los actores tampoco han demostrado que la causa eficiente de la presunta pérdida de capacidad laboral, fue creada o concretada por las demandadas; y finalmente vi) Se hace evidente de los elementos probatorios allegados al caso, que el daño que da fundamento a la demanda tuvo como causas un hecho inequívoco, flagrante y determinante producido por la víctima al no atender los deberes de tránsito establecidos en los artículos 51 y 94 de la Ley 769 de 2002 así como un hecho de un tercero que al incumplir sus deberes objetivos de cuidado contribuyó de manera determinante con el resultado final.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida

directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a cualquier condena en contra de las demandadas directas o de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** de cancelar a favor de los demandantes cualquier suma de dinero, en razón a que la acción y los medios de prueba en que se fundamenta, no acreditan en ninguna medida la responsabilidad patrimonial y extracontractual de las pasivas.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.3.). PERJUICIOS MORALES”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a la entidad demandada por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de ella, que a su vez tenga la entidad suficiente para haber ocasionado el daño alegado, porque la parte actora no ha acreditado que se haya presentado una afectación o malformación en la malla vial y especialmente no ha demostrado que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito y por tanto del daño. Por lo anterior, y por el hecho flagrante de que no existe una calificación de invalidez que permita determinar la gravedad de los presuntos daños padecidos, cualquier tasación de los perjuicios morales resulta altamente especulativa en cuanto no existe un parámetro objetivo que permita su determinación, máxime cuando se atiende que las pretensiones giran en torno a lo que equivale a una pérdida total de la capacidad laboral, situación que más allá de no estar probada, va en contra de los postulados ya establecidos por el Consejo de Estado para liquidar este tipo de daños.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.4.). PERJUICIO DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”: Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, toda vez que desde la parte demandante no se acredita ni se desarrolla cuál es la oportunidad que los señores Kleyder Andres Morales Ceron, Anny Celeste Morales Gongora, David Alejandro Morales Gongora, Johan Andres Morales Rios, Leydi Pricila Gongora Ortiz y Hector Marino Morales Velasquez; perdieron con las presuntas omisiones de mi poderdante, del Distrito de Santiago de Cali o de las otras demandadas, sino que lejos de probar sus pretensiones, lo que busca es obtener una disminución de su carga probatoria al no poder demostrar el nexo de causalidad entre el daño y las entidades del extremo pasivo. En este sentido, el Consejo de Estado, entre otras como la sentencia de radicación No. 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593) del 11 de agosto de 2010, se ha pronunciado bajo el entendido que esta figura no puede convertirse en un mecanismo para declarar la responsabilidad de un demandado, en ausencia de la acreditación del nexo de causalidad, pues si es así, lo que procede es la exoneración de la responsabilidad. Siendo así, al no existir un medio de prueba que acredite la oportunidad que se perdió por los hechos objeto de esta litis, no se puede hablar de que dicho perjuicio sea procedente.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.5.). DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN”: Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio en cuanto el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio (daño a la vida en relación) se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. Ello implica que desde la parte activa de la acción se debe demostrar de manera efectiva la existencia del daño a la salud referido, y ello no se presenta en el caso, pues no se ha podido demostrar por parte de los demandantes, la existencia de responsabilidad de la entidad demandada, y mucho menos de la aseguradora que represento, y con ello se evidencia la ausencia de obligación al respecto.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.5.). DAÑO A LA SALUD”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a las entidades demandadas, por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de alguna de ellas que haya ocasionado el daño, pues la parte actora no ha acreditado que se haya presentado una malformación en la vía o una falta de señalización que haya sido la que efectivamente causó el presunto daño, o que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito, y ni siquiera ha acreditado de manera plausible el daño, es decir la pérdida de capacidad laboral del señor Kleyder Andres Morales.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.4.). INTERESES MORATORIOS”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma no encuentra sustento jurídico en las normas citadas, pues lo manifestado en este punto de la demanda corresponde a un error de interpretación del togado de los actores, toda vez que el contenido normativo aludida, a lo que hace referencia es al incumplimiento respecto del contrato de seguro, lo cual en ningún caso tendría relación con la solicitud de la demanda, máxime si se tiene en cuenta que los argumentos del escrito petitorio carecen de fundamentos tanto de hecho como de derecho, y en cualquier medida, el cumplimiento de la situación plasmada en el artículo, sólo se daría en el escenario de una sentencia condenatoria en firme, pues sólo ello implicaría la efectiva acreditación del derecho, toda vez que se hace referencia a un tipo de contrato que tiene un carácter meramente indemnizatorio, entonces como se dijo, ello sólo tiene sentido en el hipotético escenario en que se decreten todas solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

Sobre este tema se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC8573-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2020-01122-01 de 15 de octubre de dos mil veinte (2020), y ha dicho:

“Pero esa sanción –ha afirmado esta Corte– «no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo del retraso en la liquidación»”³

En ese sentido, es claro que la pretensión resulta improcedente.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.2.). CONDENA DIRECTA A LA ASEGURADORA”: Me opongo rotundamente a la prosperidad de esta pretensión en cuanto la solicitud desconoce la naturaleza del contrato de seguros, pues se debe tener en cuenta que al ser acuerdo ley para las partes, se debe atender a sus estipulaciones para aplicarse en según qué caso, y debe resultar claro tanto para la parte actora como para el despacho, que incluso el hipotético caso de responsabilidad de las demandadas, no implica *per se* una responsabilidad de la

³ (SC 5 nov. 2013, exp. 1998-15344-01).

aseguradora, toda vez que para que se dé esa obligación, se deben cumplir las condiciones del contrato como que exista cobertura temporal y material, o el hecho de que el pago opera en forma de reembolso, y el carácter meramente indemnizatorio, entre otras que se expondrán en el apartado relacionado al llamamiento en garantía en donde se profundizará en el contenido del contrato de seguro que sustenta la vinculación de las aseguradoras en este caso.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.5.). CONDENEN EN COSTAS”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a la declaratoria de esta pretensión, en cuanto la obligación para la compañía aseguradora nace en el momento en que se realice el siniestro, es decir, en el momento que se declarase que el Distrito de Santiago de Cali resulta responsable extracontractualmente por los daños legados por los demandantes. En este sentido, al ser este el objeto del litigio y al no existir una sentencia en firme, no es posible pretender las costas del proceso sobre una obligación que aún no ha nacido a la vida jurídica.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.6.). INDEXACIÓN”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten todas las solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.3.). LUCRO CESANTE”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, ya que, aunque el togado omite hacer un análisis de elementos de procedencia del perjuicio en el escrito genitor, la solicitud debe tener fundamento en una pérdida de capacidad laboral, en este caso del afectado, y además, debe fundarse en la existencia de una ganancia cierta que se dejó de percibir como consecuencia del daño, y propiamente en el daño; pues sin que todo ello en conjunto esté determinado, no es posible atribuir ninguna clase de procedencia de indemnización de este tipo, pues como bien lo explica el Consejo de Estado⁴ “*el lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibirse, o la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño*”. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este contexto se debe dejar claro que no está demostrado que el señor Morales haya tenido una pérdida de capacidad laboral, ergo, la solicitud ya carece del daño que requiere la figura para estructurarse, pero aunado a ello no está probado que la víctima hubiese dejado de percibir ingresos a causa de los hechos que se alegan en la demanda, motivo por el cual no se adecúa la situación al concepto de lucro cesante, pues como ya se adujo haciendo uso del concepto del Consejo de Estado, sólo se puede hablar de lucro cesante, en la medida en que se trate de una ganancia que haya dejado de percibirse, y ello no se da, pues el certificado laboral acercado al plenario, sólo da fe de una vinculación laboral anterior al accidente, lo que demuestra *per se* que haya continuado con sus ingresos posterior al hecho, así como tampoco demuestra el documento que el demandante haya dejado de trabajar y de percibir sus ingresos de manera regular después de lo ocurrido.

⁴ Sentencia Rad. 00526 de 2016, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio, habida cuenta que este debe cumplir las características de todo tipo de daño, esto es, que sea cierto, personal y directo, sin embargo, es evidente que no hay certeza sobre su cuantía, pues como ya se dijo, la parte actora no hace ningún tipo de alusión a los criterios utilizados para determinar la suma exigida, sólo se limita a señalarla sin ningún tipo de técnica jurídica que permita el juzgador determinar si la misma está basada en elementos adecuados y existentes en el caso, ejemplo de ello se puede decir que no se determinó ni el presunto porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ni el tiempo en que supuestamente dejó de percibir su salario, ni los motivos por los cuales dejó de percibir el salario, ni ninguno de los demás rubros a tener en cuenta para su cálculo, este último lo realizó a base de suposiciones y conjeturas, tan es así que ni siquiera se sugiere si se trata de un lucro cesante consolidado o uno futuro, lo que debe llevar indefectiblemente a su negativa.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “6.2.). LUCRO CESANTE CONSOLIDADO”: Sobre el particular debe señalarse que el togado incurre en un error al establecer la fórmula para liquidar el valor relacionado al lucro cesante consolidado, pues para ello hace uso del siguiente criterio:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$LCC = \$2.117.172^* \frac{1.004867^3 - 1}{0.004867}$$

$$LCC = \$19.429.745$$

Sin embargo, debe tenerse claro que dicha consideración es errónea, pues es el mecanismo para actualizar una indemnización que ya ha sido concedida y que se debe atemperar a un tiempo determinado entre el hecho y el fallo que otorga el derecho, como se explica a continuación:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = indemnización consolidada, es decir, la comprendida entre la fecha del hecho y la del fallo.

Ra = renta actualizada.

n = número de meses transcurridos entre la fecha del hecho y la fecha del fallo.

i = interés puro o técnico, 6% anual o 0,4867 mensual (se representa: 0,004867).

En ese escenario debemos indicar que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, replicada por ser un consenso, entre otras, en la sentencia con Radicación número: 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146), del 22 de abril de 2015, se explica lo siguiente:

Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:

1) Se establece la renta mensual del fallecido, **destinada a la ayuda económica del grupo familiar**, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. **Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador**. El valor así calculado se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).

2) Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax) - (Tcons).

3) Con la renta actualizada (Ra) se calcula **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente. Así, **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$Rc = Ra \times (1 + i)^n$$

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tcons).

(...)

4) Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios **la renta dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.

Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir -(Rc) o (Rf)- por el tiempo consolidado o futuro -(Tcons) o (Tfut)-, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Atendiendo lo anterior es claro que los accionantes no han hecho un estudio juicioso de los valores que se deben comprender en las fórmulas para liquidar, a efectos de obtener un resultado correcto sobre el hipotético lucro cesante que pretenden obtener, pero, sobre todo, salta a la vista que en su ejercicio hacen uso de un valor erróneo como es el 100% de los ingresos que percibía al momento del hecho, el señor Morales Cerón, y ello es equivoco porque no es lógico pensar que el mencionado

demandante destinaba el 100% de sus ingresos al apoyo de su hogar, como lo sugiere la demanda. Sumado a lo anterior salta a la vista que los demás elementos de la liquidación son meramente especulativos, empezando por el porcentaje de capacidad laboral, el cual determina el apoderado de los demandantes, aunque no tenga él la calidad ni la facultad para ello.

Finalmente se debe manifestar que el hecho de que exista un certificado laboral no implica que el dinero a que se hace referencia en este punto se haya dejado de percibir, pues es claro que en caso de ser acertado que el afectado se encontraba laborando, la incapacidad debió ser pagada por el empleador, la ARL y/o la EPS en última instancia.

Por lo anterior y al tratarse de unos valores determinados a base de suposiciones, imprecisiones, datos incorrectos y valores especulativos, no puede proceder la solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “6.3.). LUCRO CESANTE FUTURO”: Sobre el particular debe señalarse que en igual situación que el caso anterior, el togado incurre en un error al establecer la fórmula para liquidar el valor relacionado al lucro cesante futuro, pues para ello hace uso del siguiente criterio:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$LCF = \$529.293 \times \frac{1.004867^{487.2} - 1}{0.004867^* (1, 004867^{487.2})}$$

$$LCF = \$98.538.874$$

Sin embargo, debe tenerse claro que dicha consideración es errónea, pues es el mecanismo para actualizar una indemnización que ya ha sido concedida y que se debe atemperar a un tiempo determinado entre el hecho y el fallo que otorga el derecho, como se explica a continuación:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = indemnización consolidada, es decir, la comprendida entre la fecha del hecho y la del fallo.

Ra = renta actualizada.

n = número de meses transcurridos entre la fecha del hecho y la fecha del fallo.

i = interés puro o técnico, 6% anual o 0,4867 mensual (se representa: 0,004867).

En ese escenario debemos indicar que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, replicada por ser un consenso, entre otras en la sentencia con Radicación número: 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146), del 22 de abril de 2015, en donde se explica lo siguiente:

Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:

1) Se establece la renta mensual del fallecido, **destinada a la ayuda económica del grupo familiar**, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. **Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador**. El valor así calculado se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).

2) Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, $(Tfut) = (Tmax) - (Tcons)$.

3) Con la renta actualizada (Ra) se calcula **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente. Así, (...) **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo futuro (Rf), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$Rf = Ra \times \frac{((1 + i)^n - 1)}{i(1 + i)^n}$$

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut).

4) Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios **la renta dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.

Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir -(Rc) o (Rf)- por el tiempo consolidado o futuro -(Tcons) o (Tfut)-, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Atendiendo lo anterior es claro que los accionantes no han hecho un estudio juicioso de los valores que se deben comprender en las fórmulas para liquidar, a efectos de obtener un resultado correcto sobre el hipotético lucro cesante que pretenden obtener, pero, sobre todo, salta a la vista que en su ejercicio hacen uso de un valor erróneo como es el 100% de los ingresos que percibía al momento del hecho, el señor Morales Cerón, y ello es equivoco porque no es lógico pensar que el mencionado demandante destinaba el 100% de sus ingresos al apoyo de su hogar, como lo sugiere la demanda.

Sumado a lo anterior salta a la vista que los demás elementos de la liquidación son meramente especulativos, empezando por el porcentaje de capacidad laboral, el cual determina el apoderado de los demandantes, aunque no tenga él la calidad ni la facultad para ello.

Finalmente se debe manifestar que el hecho de que exista un certificado laboral no implica que el dinero a que se hace referencia en este punto se haya dejado de percibir, pues puede confluir perfectamente que el señor Morales haya continuado trabajando para la empresa que certifica o para cualquier otra, devengando un salario producto de su trabajo y ello hace improcedente la solicitud, máxime si se tiene que la supuesta pérdida de capacidad laboral no ha sido demostrada aún y como se dijo, es un aspecto especulativo del que hace uso el apoderado actor para incrementar las pretensiones.

III. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

1. INEXISTENCIA DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Aduce la parte actora en su relato, que en el caso bajo examen, la falla en el servicio se presenta por la existencia de un hueco en la carrera 1 entre calles 27 y 28 del Municipio de Santiago de Cali, resaltando que la responsabilidad del Distrito Especial de Cali se estructura desde su presunta omisión en el mantenimiento de la malla vial y en la falta de señalización en el sector, sin embargo, tal aseveración no tiene soporte probatorio, ni sustento argumentativo desde el punto de vista de la sana crítica, pues no existen elementos de convicción que lleven a esa conclusión de manera inequívoca, lo cual resulta evidente tras realizar un análisis detallado de los elementos principales del señalamiento al Distrito que son: 1. Una fotografía que fue extraída de Google Maps sobre la cual no se hace referencia ni se insinúa a qué momento pertenece y 2. La Hipótesis del IPAT en la que dicho sea de paso, se hace referencia a que se realizó una orden de comparendo al demandante por no contar con la revisión técnico mecánica del vehículo en el cual ocurrió el accidente; elementos estos sobre los que se debe señalar que, por ejemplo, respecto del primero (la fotografía), no hay referencia ni datos sobre el lugar puntual al que pertenece y/o la fecha en que fue tomada, detalles que son necesarios para establecer su vinculación directa con los hechos y sobre todo, con el daño alegado. Sobre el segundo elemento (el IPAT) se debe decir que fue suscrito cuando la escena se había alterado de manera sustancial, pues como se advierte en el mismo, fue tomado 25 minutos después de los hechos, en consecuencia la hipótesis puede corresponder o no a la percepción de quien lo diligenció, o al relato de alguien en el sitio, tiempo después del suceso, pero no puntualmente a lo realmente ocurrido, sin embargo, también se advierte de tal documento que exhibe una situación que pudo ser determinante para que se presentara el hecho dañoso, y este es el hecho de que el señor Kleyder Andrés Morales Cerón conducía un vehículo (motocicleta de placa NCZ-61R) que no tenía su respectiva y necesaria revisión técnico mecánica, es decir que nadie puede asegurar que dicho vehículo estuviese mecánicamente apto para transitar, motivo por el cual no se puede desconocer que este pudo ser el motivo del hecho, y no lo que alega en la demandan, pero sobre todo, debe considerarse que dicho documento (el IPAT) sólo tiene la calidad de indicio, toda vez que el agente que lo suscribe no es un testigo presencial, todo sobre lo cual se ahondará más adelante.

Para sustentar la tesis anteriormente presentada, debe tener en cuenta el despacho que, fuera de los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado, la falla en el servicio es el título de

imputación por excelencia bajo el cual se juzga la conducta de la Administración Pública, *imputatio iuris*, y por ello requiere esencialmente su prueba y acreditación, tal como la ha dicho el H. Consejo de Estado:

“Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil⁵.”⁶ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Sobre la carga probatoria de los demandantes cuando se trata de regímenes subjetivos como la falla en el servicio, la doctrina nacional ha reiterado la anterior posición jurisprudencial:

“(…) es claro que el hecho de que un daño le sea imputable a una persona pública no es suficiente normalmente para hacerla responsable: es necesario que la víctima demuestre que en su origen se encuentra un mal funcionamiento administrativo. Se trata de que el actor establezca sobre todo la realidad de los hechos, porque la calificación propiamente jurídica corresponde al juez. Naturalmente, un cúmulo probatorio deficiente pone en riesgo la prosperidad de las pretensiones. Se trata entonces de que, normalmente, la responsabilidad por falta es una responsabilidad por falta probada. Según Llorens-Fraysse, “hay responsabilidad por falta probada cuando el juez exige que la falta sea establecida con certeza (habitualmente) el juez no se contenta con indicios”.

En consecuencia, si el demandante no prueba la falla y en el caso concreto ésta no se presume, aun cuando la Administración nada haga para exonerarse, el fallo será absolutorio.

Ahora bien, la prueba de la falta puede descomponerse en dos elementos, a saber: primero, la prueba del hecho invocado y, segundo, la prueba de su carácter anormal, o sea, la prueba de la violación de las obligaciones administrativas. Esta segunda cuestión es en realidad una operación de calificación jurídica que el actor demanda al juez confirmar, y en la cual interviene la apreciación de este último.”⁷ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En esa medida, es deber de la parte actora acreditar, en primer lugar, que la entidad pública tenía a cargo unos deberes y obligaciones y, en segunda medida, que estos fueron completamente desconocidos o cumplidos parcial o tardíamente, sin embargo, en el presente asunto, no se ha logrado acreditar ninguno de los elementos para derivar una falla en el servicio en cabeza de la entidad territorial.

Ello se concluye porque en el escrito de la demanda los accionantes no acompañan elementos probatorios que puedan dar fe de la presunta omisión, contrario a ello, sustentan sus afirmaciones

⁵ **ARTÍCULO 177. Carga de la prueba.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA MÉNDEZ. Radicado No. 19001-23-31-000-2011-00434-01(53977).

⁷ Saavedra Becerra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado. Tomo I. Grupo Editorial Ibañez. Págs. 313-314.

en dos presupuestos probatorios que carecen de la capacidad de estructurar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, y ello es así porque sobre los dos conceptos, tanto fotografías sin información de acreditación como Informes de Policía de Accidentes de Tránsito, se ha pronunciado el honorable Consejo de Estado para dar luces de cuál es el rol que cumplen estos dos elementos en un proceso en el que se discute la responsabilidad administrativa de una entidad, bajo la óptica de un régimen subjetivo de falla en el servicio, como se pasa a explicar de manera independiente.

En primer lugar respecto de las fotografías aportadas, se debe manifestar que: (i) no fue posible determinar con base en los metadatos, la fecha real en la que se capturó o a la que pertenece la misma y ni siquiera se sugiere en el escrito petitorio; (ii) no fue posible establecer desde los metadatos la ubicación del lugar en donde fue tomada o al que pertenece; (iii) no fue posible establecer si la ubicación en la que fueron tomadas corresponde con el lugar y momento de los hechos que aquí se debaten y (iv) no fue posible establecer la autenticidad y por tanto la validez del contenido reflejado en la fotografía. En este escenario es claro que el contenido de dicho material no puede ser utilizado para sustentar la existencia o no de un aspecto particular, en cuanto de ellas no se puede concluir nada sobre tiempo, modo y lugar.

Por todo ello, lo correcto de concluir, en aras de propender por el respeto del principio de legalidad y por el valor que debe tener la realidad procesal de cara a una decisión condenatoria o absolutoria en cualquier proceso judicial, es que no puede dársele razón o calidad de certeza a las fotografías aludidas, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo se desarrolló el referido accidente, es decir, no se puede considerar de manera definitiva que todo ocurrió debido a la existencia del hueco en el lugar del accidente o de falta de señalización, por el simple hecho de que a la demanda se allegó un material fotográfico que evidencia un hueco, pero del cual no se tiene constancia alguna de estar relacionado, como se dijo, ni con el momento, ni con el lugar, ni con el modo, ni con los sujetos involucrados.

Sobre el valor probatorio de materiales fotográficos, el Consejo de Estado en sentencia reciente ha considerado que:

(...) las fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse, con lo cual, el valor probatorio que puedan tener no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición. En otras palabras, para que las fotografías tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, se debe tener certeza sobre la persona que las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, lo que normalmente se devela a través de otros medios complementarios. De esta forma, la autonomía demostrativa de dichos documentos se reduce en la medida que se requieran otros medios de convicción que las soporten⁸. (Subrayado y negrillas fuera de texto original)

Ahora bien, en segundo lugar y respecto de las consideraciones expuestas en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001113940 elaborado el 22 de enero de 2021, en donde plantea la

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera (2018). Sentencia 05001233100020030399301 del 14 de febrero. C.P Ramiro Pazos Guerrero.

hipótesis de la vía (306) o hueco en la vía, la hipótesis para el vehículo 2 (BGY-99D) (no estar atento a la vía y acciones de los otros actores viales) y se señala que se realizó orden de comparendo por falta de revisión técnico mecánica, se debe decir que de la misma manera que ocurre con el material fotográfico, este documento no tiene la entidad suficiente para determinar la causa efectiva del siniestro, toda vez que lo único que representa es la apreciación del agente que no fue testigo de los hechos y que, en este caso llegó al lugar 25 minutos después si se tiene en cuenta lo descrito en el informe:



Ello quiere decir que el agente llegó con un tiempo considerable desde lo ocurrido al sitio de los hechos, y luego de que el sitio fuese alterado, por lo que aquel no está en la capacidad de determinar, con su observación posterior y ya parcializada, la que fue o pudo ser el motivo del accidente, por cuanto no lo presencié.

De lo anterior se concluye que la parte demandante no ha logrado demostrar que la causa eficiente del hecho generador del daño fue la presunta omisión en el mantenimiento de la vía o la falta de señalización por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, en razón a que, la única prueba que adjunta para su demostración es el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001523601, que como ya se explicó, carece de la entidad de demostrar por sí sólo las circunstancias de los hechos, y que, en todo caso, hace referencia a que en el evento se presentaron responsabilidades inequívocas y determinantes tanto de la víctima como de un tercero, como se ahondará más adelante.

Por lo argüido anteriormente, ni la hipótesis ni el contenido del informe, puede entenderse como plena prueba de la causa eficiente del hecho, ya que no representan el momento preciso de la ocurrencia del accidente ni las condiciones particulares que se pudieron dar para ello.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024, ha referido que:

*Es importante precisar que **las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este***⁹. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido, es claro que el IPAT no prueba *per se* que la causa eficiente del accidente haya sido la presunta existencia de un hueco ni la falta de señalización, sobre la que, dicho sea de paso, no se hace mención alguna.

⁹ Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914).

Por todo ello, el valor probatorio del Informe policial de accidente de tránsito No. **A001522937**, no es suficiente para acreditar la falla en el servicio aludida por los accionantes para solicitar la responsabilidad de la entidad territorial, pues reitero, se trata de meras especulaciones del agente de tránsito que hizo su aparición en el sitio de los hechos con un tiempo importante de diferencia y cuando la escena estaba alterada, lo cual claramente no puede revestir el carácter de una verdad absoluta, y al no existir en el expediente otro medio de convicción que confirme ese aspecto de las hipótesis aludidas en el IPAT, no es posible declarar que la causa del accidente fue la planteada por el togado actor.

Frente a las consecuencias probatorias que se le deben otorgar al Informe Policial de Accidente de Tránsito IPAT, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, tal como se observa a continuación:

*Así entonces, **el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño;** las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los demandantes pero no el nexo causal¹⁰. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

*En este punto conveniente es precisar, **que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración,** para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás demandantes¹¹. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

*Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, **no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Por lo anterior, es menester indicar al despacho que la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria de demostrar la falla en el servicio como elemento constitutivo de la responsabilidad del

¹⁰ Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zoranny Castillo Otorala. Radicación No. 76001333301320140019801.

¹¹ Sentencia del 30 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403.

Estado, pues no obra en el expediente algún medio de convicción idóneo, pertinente, útil y concluyente que permita establecer la existencia de la presunta omisión del Distrito de Santiago de Cali, habiéndose explicado ampliamente los alcances limitados que tienen los elementos de convicción allegados.

En este sentido, al no acreditarse la falla, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada la presente excepción.

2. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

En el presente caso la parte actora pretende atribuir la responsabilidad de la ocurrencia de un accidente a la entidad territorial de Santiago de Cali con fundamento en la supuesta inacción respecto del mantenimiento de la malla vial y la falta de señalización del sitio en que ocurrió el siniestro y para ello pretende hacer eco de lo contenido en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001522937 elaborado el 27 de septiembre de 2022, sin embargo, y sólo en el caso en que se decida darle pleno valor probatorio al informe, de dicho documento lo que se puede extraer es que la víctima estaba conduciendo en contravía de las obligaciones de tránsito dispuestas para el tipo de automotor involucrado.

En tal sentido cabe señalar que la demanda indica de manera específica que el señor Morales Cerón conducía una motocicleta, pues en el hecho quinto del líbello petitorio el apoderado indica *“El día 27 de septiembre de 2022 a las 7:05 horas, se desplazaba en calidad de conductor (haciendo referencia al señor Kleyder Andrés Morales Cerón) de la motocicleta de placa NCZ61E, por la carrera 1 entre calles 27 y 28 en sentido occidente-oriente de la Ciudad de Cali.”*. Por lo tanto, debemos ubicarnos en las responsabilidades de tránsito dispuestas para este tipo de vehículos.

Lo primero que se debe decir es que el IPAT utilizado para pretender endilga la responsabilidad de la demandada, indica en su contenido que el señor Morales conducía un vehículo que no tenía las calidades necesarias, en los términos de la Ley 769 de 2002, para transitar por las vías del país, y por supuesto por las de la ciudad de Cali.

Véase que el referido documento indica:

13. OBSERVACIONES	<i>Hipotesis para conductor del vehículo # 2 (BGY990) "No estar atento a la vía y acciones de los otros actores viales. Hipotesis 306 para la vía "Huevo". La Motocicleta de Placa NCZ61E Choca contra el huevo, perdiendo el control y sufriendo volcamiento sin que el vehículo # 2 (BGY990) pueda realizar una maniobra de evasión o frenado para evitar el choque al conductor del veh # 2 Se le realiza orden de Compendio por revisión mecánica</i>		
14. ANEXOS	ANEXO 1 Conductores, Vehículos	ANEXO 2 Víctimas, Pasajeros o Pequeños	OTROS ANEXOS (FOTOS Y VIDEOS)

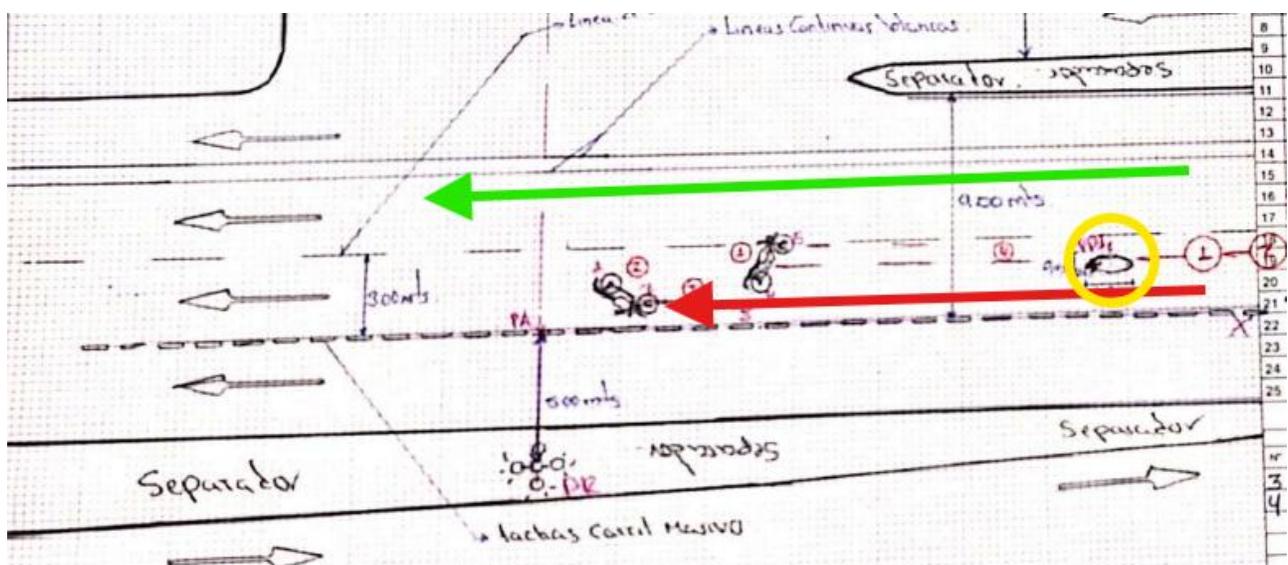
Ello implica claramente que se estaba desconociendo por el conductor y aquí demandante, señor Morales, de las obligaciones contenidas en el artículo 51 de la Ley 769 de 2002, que al respecto dice:

Artículo 51. Revisión Periódica de los Vehículos. <Artículo modificado por el artículo 201 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente,

todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. (Resaltado y negrillas fuera del texto original)

Como tal situación no se da, es claro que estamos hablando de una situación inequívoca en la que la decisión voluntaria e irresponsable del conductor, lo puso a adelantar una actividad que por naturaleza es riesgosa, en un vehículo del que no se sabe si estaba capacitado para el tránsito en zonas urbanas, es decir, de la falta de corroboración del estado de la motocicleta surgen diferentes interrogantes, todos ellos relacionados con la causalidad directa del accidente, pues sin la certeza del óptimo estado del automotor, no se puede concluir que el mismo tenía (por ejemplo) los frenos en un estado adecuado que permitieran atender una situación intempestiva como un vehículo que se cruza o un elemento extraño en la vía, ello es importante porque de la información contenida en el IPAT, se tiene que el demandante se desplazaba por una vía urbana, en donde los límites de velocidad son menores, por lo que causa extrañeza que si este se encontraba respetando las normas de tránsito, no tuviera la posibilidad de evitar la caída, y ello puede tener su sustento en que el vehículo no tuvo los frenos en debida forma como para detenerse y evitar el bache a que se hace alusión, o en el hecho de que llevaba tanta velocidad que no pudo realizar una maniobra para evitar algún aspecto extraño en la vía. igual suerte lleva el cuestionamiento sobre las luces, las llantas, y cualquier otro aspecto que se requiere necesario en un vehículo de ese tipo, para que su estado no contribuya a un hecho dañoso como el que nos ocupa.

Ahora bien, en igual hilo de argumentos, en el IPAT del que hace eco la parte actora, se hace una representación de lo que pudo ser la escena del accidente y de él se evidencia lo siguiente:



Con la flecha roja hemos resaltado lo que el IPAT indica era la posición y trayectoria de la motocicleta conducida por el señor Morales Cerón, con el círculo amarillo hemos representado el hueco o afectación en la malla vial que presuntamente ocasionó el siniestro y con la flecha verde hemos representado la posición y trayectoria que debería haber llevado la víctima en su ejercicio de conducción. De los anteriores datos se puede concluir con claridad que, en cualquier caso, la situación se ocasionó por la acción de la víctima de conducir en contravía de lo establecido en las normas de tránsito para vehículos tipo motocicleta, es decir por el carril derecho y a no más de un (01) metro de la acera, pues, aun en un escenario en el que exista la afectación vial, el accidente

no se hubiese presentado si la víctima hubiese conducido por el carril que le correspondía.

En relación con lo manifestado se debe traer a colación lo establecido en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, perteneciente al capítulo V referente a ciclistas y motociclistas, el cual dice:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Aunado a ello se debe tener en cuenta que, como ya se mencionó antes pero que guarda especial relación, según el IPAT, el siniestro se presentó en una zona considerada como “Residencial”, por lo que, atendiendo a las estipulaciones del Código Nacional de Tránsito, el límite máximo para circular en este tipo de zonas es de 30 km/h, sumado al hecho de que por la hora en que presuntamente se presentó el suceso, la velocidad se debía disminuir aún más, por lo que a una conducción menor a 30 km/h, era posible, y debió ser posible esquivar el supuesto hueco.

En este contexto es claro que nos encontramos ante evidentes incumplimientos de las normas de tránsito por parte de la víctima, situación que es determinante para que se produzca el resultado dañoso, y en tal sentido nos encontramos ante la configuración de los elementos propios de la figura de culpa exclusiva de la víctima en términos de lo considerado para esta figura por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, al respecto se debe hacer referencia a lo que el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), ha dicho al referirse sobre la culpa de la víctima:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Bajo esta perspectiva, es menester indicar que la demandante al circular incumpliendo las normas de tránsito especiales y particulares para el tipo de vehículo que conducía, se expuso completamente al riesgo, en el entendido de que renunció a su propia seguridad y confió en sortear de manera imprudente la actividad peligrosa de conducir, a pesar de tener la obligación de conocer que no debía conducir el vehículo sin la respectiva revisión técnico mecánica, sin exceder el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y por un carril por el cual no le correspondía desplazarse -el central o izquierdo-, situaciones que fueron establecidas para que su integridad como conductor se vea lo menos comprometida en un escenario de riesgo latente como lo es la conducción de vehículos.

Sobre este último particular, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida dentro del expediente con radicado No. 9722, indicó lo siguiente:

“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”. (Negritas fuera del texto original)

Aquí brilló por su ausencia, para el momento del hecho, el ejercicio de actitud síquica del conductor de la motocicleta, como quiera que, al ya inherente riesgo de conducir, le añadió por voluntad propia la conducta aún más riesgosa de hacerlo sin prever las normas de tránsito, y en tal sentido exponerse a que ello le llevara a un desenlace como el que alega le terminó ocurriendo. En suma, es contundente que no hubo una contribución activa de su parte con miras a evitar la ocurrencia del daño, dado que no cumplió sus obligaciones para ejercer la actividad peligrosa de conducir y por el contrario su actitud imprudente le expuso a una situación de la que terminó desencadenando la situación dañosa que nos ocupa.

En tal contexto entonces es procedente concluir que las lesiones que manifiesta haber sufrido el actor, son un claro ejemplo de dejar al azar su seguridad y no adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes, y bajo esta premisa, es claro que la causa eficiente del daño no corresponde ni puede ser atribuida a la falla en el servicio alegada, sino a una falta de cumplimiento de deberes legales y a la falta de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad antes indicadas las cuales revisten las características de ser obligatorias cuando de asuntos de tránsito se trata, el hecho dañoso objeto de litigio no se hubiera configurado.

En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

3. HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

En el presente asunto, debe tenerse en cuenta que según las manifestaciones de la demanda, el hecho dañoso se produce porque presuntamente el conductor del vehículo de placas NCZ61E cayó en un hueco que no estaba debidamente señalizado y ello ocasionó los daños que se exigen como indemnización, sin embargo, como se puede observar del contenido del Informe policial de Accidentes de Tránsito, lo que se presentó tuvo su causa en una actuación desprovista de cuidado y en claro incumplimiento de las normas de tránsito por parte del conductor del vehículo número 2 de placas BGY-99D, involucrado en el hecho, pues el referido documento indica que este último no estaba atento a la vía y a las acciones de los otros actores viales, lo que claramente influyó en el desenlace dañoso.

Al respecto, el artículo 55 la Ley 769 de 2002 dispone que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o **ponga en riesgo** a las demás; a su vez el artículo 61 de la misma normativa establece la obligación en cabeza de todo conductor de abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.

En este hilo argumentativo se debe traer a colación lo dicho por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, quién dice:

Al respecto, la Sala considera importante resaltar que el Código Nacional de Tránsito está concebido como un conjunto armónico y coherente de normas que, entre otros, cumple con el objetivo de precaver y prevenir la accidentalidad, con las consecuencias nocivas que esta conlleva en la vida, la integridad personal y los bienes de los ciudadanos, frente a lo cual se tiene establecido que "la accidentalidad vial en Colombia resulta ser en términos de fallecimientos y heridas mucho más problemática que la violencia que causa lo que se denomina "el orden público"¹².

En el mismo sentido, es decir en el de la responsabilidad del agente que está a cargo de la actividad peligrosa, y su obligación de ceñirse a los postulados de las normas de tránsito en pro de no generar situaciones de riesgo para los demás, ha dicho la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, que:

Así las cosas, en el caso de autos la Sala concluye que se presentó una falla de la administración, por cuanto el agente conductor de la motocicleta no previó y más bien omitió adoptar las medidas de seguridad y precaución que el terreno mandaba para la conducción del automotor, actividad que además se ejerció con exceso de velocidad, incrementando el riesgo que desarrollar tal actividad implica, según lo informaron las pruebas testimoniales, todo lo cual configura el incumplimiento de las normas de tránsito terrestre que demandan la prevención y mitigación de los riesgos propios de la actividad peligrosa, sin que se halle demostrada una situación del servicio que justifique tal comportamiento.

Este concepto claramente se encuentra en las antípodas de los sujetos, ya que es un caso en que se falla en contra de la administración porque un agente suyo conducía sin cumplir con los requisitos que le imponen las normas de tránsito y también las normas sociales y de orden público, pero se aplican perfectamente al asunto que nos ocupa, porque en este también hay un agente que

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de febrero de 2019, Rad. 42.776.

desconoce esos criterios de conducta, y con su actuar puso en riesgo y afectó a terceros involucrados como el demandante del caso *sub exmamine*.

En efecto, las condiciones de modo bajo las cuales ocurrió el accidente de tránsito que convoca este litigio, son suficientes para afirmar la existencia de una causa extraña que exonera de responsabilidad a Distrito Especial de Santiago de Cali; lo anterior de conformidad con los requisitos exigidos por el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa:

“La causa extraña excluyente de responsabilidad requiere de presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la entidad a quien se pretende imputar el daño; esto es, para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad al ente demandado, es necesario que jurídicamente se le pueda calificar como la fuente exclusiva del daño desde la teoría de la causalidad adecuada; en otras palabras, que haya sido determinante para su producción”.

En el caso concreto, es incuestionable que es la conducta de un tercero la que constituye la causa eficiente del accidente, pues el actuar irresponsable del conductor del vehículo BGY-99D fue el que generó el accidente en el cual se vio involucrado el vehículo de placas NCZ-61E del cual resultó afectado el aquí demandante.

Resulta evidente entonces que todas las características planteadas por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa para que se configure una causa extraña, en este caso, la culpa exclusiva y determinante de un tercero, se cumplen a cabalidad, y tanto los hechos como los elementos de prueba dejan en evidencia que la causa eficiente del accidente de tránsito fue la violación de la normatividad de tránsito que se materializó por la conducta irresponsable realizada por el conductor del vehículo BGY-99D, por la cual, se deberá declarar como probada esta excepción.

4. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL ACTUAR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL DAÑO ALEGADO

Se invoca este medio exceptivo atendiendo a que como se explicó en las consignas anteriores, la parte actora no logró probar la responsabilidad que pretende que sea imputada al ente territorial, pues no acercó medio de convicción con el que se pueda acreditar que se presentó una falla en el servicio que haya ocasionado afectaciones a los demandantes y que haya sido consecuencia de una conducta negligente, retardada u omisiva de la que pueda predicarse un nexo de causalidad entre la indebida prestación del servicio de la entidad demandada y el daño alegado fruto del accidente ocurrido el 27 de septiembre de 2022, contrario a ello, como se explicó ampliamente en apartes anteriores, se evidencia la configuración de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, las cuales resultan determinantes para generar el desenlace dañoso por el que se exige perjuicios y lo que a su vez desliga la actuación u omisión del ente territorial del daño, es decir, rompe el nexo de causalidad.

Al respecto, el artículo 2341 del Código Civil, dice:

*“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”, se desprende necesariamente que **es obligatorio que la parte demandante acredite la existencia de tres elementos:** 1) el hecho dañoso acaecido culpablemente (o delictualmente si es el caso), 2) el daño y **3) la relación de causalidad entre esos dos elementos.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En igual sentido, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de septiembre de 2002, expediente 6143, señaló:

*“(…) Toda responsabilidad civil extracontractual se estructura sobre tres pilares fundamentales que, por lo general, debe demostrar el demandante: el hecho dañoso o culpa, el daño **y la relación de causalidad** (…)*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Igualmente, señaló la Corte Suprema de Justicia que es el demandante quien debe acreditar estos tres elementos, y en tal sentido ha dicho lo siguiente:

*“(…) se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que **quien reclama a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar en principio,** el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y **la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores** (…)*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Así entonces, en el escenario de análisis conductual que ofrece el esquema de la falla de prestación del servicio, los elementos que deben soportar la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado también son semejantes. No debe perderse nunca de vista que siempre recae en la parte actora la carga probatoria de demostrar al operador judicial la culpa - en este caso - el hecho o conducta constitutiva de falla en el servicio, el daño y su respectiva magnitud en aras de poderlo cuantificar y finalmente, pero no menos importante, el nexo de causalidad entre los dos primeros.

Así lo entendió el Magistrado Jorge Santos Ballesteros en Sentencia 6878 del 26 de septiembre del 2002, cuando dijo:

“El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino el artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e imprevisibles al tiempo del acto o contrato señala que si no se puede imputar dolo al deudor, éste responderá de los primeros cuando son “consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Por lo demás, es el sentido del artículo 2341 ib. el que da la pauta, junto con el anterior precepto, para predicar la necesidad del nexo causal en la responsabilidad civil. (...) El causalismo ha sido entendido como un método filosófico- científico que intenta explicar los fenómenos a través del estudio de sus causas, de tal manera que la pretensión de reconocer en los sucesos de la vida una relación de causa-efecto se presenta como una de las búsquedas más grandes del ser humano, un delito o culpa – es decir, de acto doloso o culposo– hace responsable a su autor, en la medida en que ha inferido daño a otro”.

Aterrizando al caso podemos afirmar entonces que no hubo culpa porque el hecho omisivo que el apoderado demandante quiere presentar como generador del daño padecido por la víctima del caso, en realidad no lo fue, ello porque como se explicó en los medios exceptivos anteriores, dicha responsabilidad sólo puede ser atribuida en este caso puntual, a la culpa exclusiva y determinante de la víctima y/o al hecho de un tercero, quienes en evidente desconocimiento de las obligaciones a ellos impuestas y a las normas de tránsito, decidieron exponerse al riesgo y a una situación en la que el desenlace dañoso finalmente ocurrió, lo cual, resulta altamente probable si se considera que la misma actividad de conducir es riesgosa y más si se realiza en desconocimiento de la Ley, como puede ser en este caso la desatención de lo contenido en los artículos 51, 55 y 94 de la Ley 769 de 2002, reseñados anteriormente.

En ese sentido se expone que, para la procedencia de la figura de la culpa exclusiva de la víctima, se requiere de lo siguiente: la presencia de un actuar: positivo o negativo, esto es, de una acción u omisión por parte de quien alega padecer el daño; y ese actuar, viene a ser el determinante y exclusivo del hecho que materializa el acontecer de las lesiones infligidas.

*(...) Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos. **En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante frente a aquélla,** casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño. En ese sentido, la Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente. **No se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño;** incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis¹³.*
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Como en el caso en cuestión lo que se puede extraer de los elementos de hecho y de derecho es que la víctima tuvo una participación determinante en el desenlace, toda vez que no existe prueba de la falla, sino que se advierte su actuación en desconocimiento de sus obligaciones legales respecto de cumplir con la revisión técnico mecánica y transitar por el carril derecho.

Igual suerte corre el análisis de lo que implicó la actuación irresponsable del tercero que en este

¹³ Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

caso omitió sus deberes objetivos de cuidado y puso en riesgo tanto su bienestar como el de los demás conductores, dentro de los cuales se encontraba quién aquí funge como demandante, el señor Kleyder Andrés Morales Cerón.

En este sentido, al no acreditarse el nexo de causalidad por los motivos expuestos, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

5. CONCURRENCIA DE CULPAS

De manera subsidiaria, considerando que sin lugar a duda la conducta de la víctima influyó en el resultado dañoso y, de no estimarse que esta fue la causa adecuada del mismo, se deberá analizar la concurrencia de culpas a luz de lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, que contempla: *“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”*.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

*“Sobre el tema de la concausa, esta Corporación ha sostenido que **el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el cuántum indemnizatorio (artículo 2357 del Código Civil) en la medida en que la misma hubiere dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado. Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales –daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal–, la conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del cuántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño”**¹⁴. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En igual sentido dice el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en sentencia que ya se citó anteriormente, que:

*(...) **incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación.** Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis¹⁵”*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Entonces, de los argumentos antes señalados se deriva la relevancia de la participación de la víctima en la causación del daño, por cuanto el señor Kleyder Andrés Morales Cerón en su condición de conductor del vehículo en el que ocurrió el accidente, actuó de manera imprudente al transitar por un carril que no le corresponde, sin la necesaria revisión técnico mecánica que le diera la certeza

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 19256 del 7 de abril de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

¹⁵ Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

del estado óptimo del vehículo y probablemente a una velocidad indebida, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 51 y 94 de la Ley 769 de 2002.

En conclusión, sea o no la causa adecuada del daño, lo cierto es que la conducta de la víctima incidió directa y determinantemente en la causalidad de los hechos materia de debate, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella.

6. FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE ESTOS

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, pues (i) no aportó el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta de Calificación de Invalidez que permita determinar la existencia del daño físico y su gravedad y (ii) no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer que la víctima dejó de percibir ingresos desde el momento de los hechos y la causa de estos.

- **Frente al perjuicio de Daño Emergente, Lucro Cesante Consolidado y Futuro**

Los actores en el libelo petitorio indican en el aparte de “4.3.). *LUCRO CESANTE*” que pretenden el reconocimiento de:

- **\$109.824.919 millones de pesos**, por concepto de lucro cesante

Como se observa:

4.3.). LUCRO CESANTE: solicito por concepto de lucro cesante las siguientes sumas de dinero:

Kleyder Andres Morales, en calidad de lesionado y victima directa la suma de:

\$109.824.919 por concepto de lucro cesante.

Sin embargo, tras completarse el capítulo de pretensiones se incluye uno adicional denominado “*CAPITULO V*” en el que se hacen otras consideraciones sobre el lucro cesante, y entonces modifican el valor inicialmente requerido para el aspecto, para incrementarlo de la siguiente manera:

TOTAL, LUCRO CESANTE: \$ 138.739.319

Habiéndose señalado la contradicción en cuanto a los valores pretendidos por este concepto se procederá a abordar el análisis de cada uno de los valores liquidados respecto de lucro cesante.

Respecto de las sumas y criterios que se exponen en el capítulo sobre lucro cesante, salta a la vista que sus resultados carecen de una liquidación objetiva, pues podemos ver que se usan como criterios base de liquidación, aspectos hipotéticos o desacertados como los siguientes:

En primera medida dice el togado peticionario que la expectativa de vida de la víctima es de “523,2 meses” fundamentando tal consideración en lo contenido en la Resolución 1555 de 2010, sin embargo, es claro que utilizar tal criterio en la actualidad compone un error por cuanto la sociedad como sus condiciones, incluidas las tasas de mortalidad, varían en el tiempo, es por ello que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas “DANE”, actualiza los valores para adaptarlos a la realidades de la sociedad. Por lo anterior, lo correcto sería utilizar los datos de actualización del DANE con corte a la fecha más cercana de redacción de la demanda.

Ahora bien, respecto del ingreso mensual sobre el cual calcular la pérdida, también se incurre en un error, pues se observa que la demanda sugiere que el valor que se relaciona se dejó de percibir desde el momento de los hechos, cuando no existe prueba alguna de que el demandante perdiera dicho ingreso a causa de los hechos, y este es el único aspecto que realmente serviría de fundamento para liquidar con tal suma.

Aunado a ello se indica que se realiza la estimación de los valores, pero sobre el supuesto de una pérdida de capacidad laboral que no tiene soporte, es decir que el togado de los accionantes especula sobre lo que para él debe ser el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando resulta claro que no tiene la calidad ni la condición para emitir un criterio al respecto, y aun así, calcula sus valores con base en dicha suposición, como se ve a continuación:

PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y EDAD AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

Debido a que el señor Kleyder Andres Morales Ceron, se encuentra en proceso de calificación la pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Invalidez, se calcula un porcentaje de 25% de PCL de acuerdo con las historias clínicas y al dictamen de medicina legal.

En esta manifestación salta a la vista que sus consideraciones se basan en el contenido de la historia clínica, que dicho sea de paso no tiene consideración alguna sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y sobre un dictamen de medicina legal que no se adjuntó entre los anexos de la demanda, que a efectos del trámite procesal implica que no existe.

En este sentido, es necesario recordar que el perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido.

Por lo anterior, para que sea posible el reconocimiento del perjuicio de naturaleza económica, es necesario que se acredite su existencia cierta, actual o futura mediante elementos de convicción que permitan determinar el valor dejado de percibir. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(...) perjuicio que el daño ocasionó (...). **Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, “(...) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios***

de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario (...).¹⁶
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, la misma corporación afirmó en sentencia del 24 de junio de 2008, que:

(...) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (...)

*Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...) Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables”.*¹⁷ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En consecuencia, el lucro cesante no puede constituirse sobre conceptos hipotéticos o simples conjeturas que no están justificadas en posibilidades ciertas y objetivas y mucho menos en datos equívocos. De manera que resulta como deber indispensable de la parte demandante, acreditar el ingreso que la víctima dejó de percibir al momento de la ocurrencia del daño, pero todo esto basado en medios de convicción ciertos y no meramente especulativos.

A su vez el Consejo de Estado en sentencia de unificación reciente del 10 de julio de 2019, limitó todas las posibles discusiones que se pudieran derivar de este perjuicio y eliminó la presunción de que toda persona en edad productiva devenga al menos un salario mínimo, en cuanto contrariaba con uno de los elementos, esto es, la certeza exigida para conceder dicha indemnización, de manera que estableció que el lucro cesante solo sería reconocido cuando obren las pruebas suficientes que lo acrediten:

La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (...)

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se

¹⁶ Sentencia del 12 de junio de 2018. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2107-2018.

¹⁷ Sentencia del 24 de junio de 2008. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2000-01121-01

demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

*La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: **i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior** o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad_o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.¹⁸ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En definitiva, resulta claro que no es posible reconocer ningún perjuicio a título de lucro cesante (consolidado o futuro), en cuanto la parte demandante sustentó sus pretensiones en datos erróneos y meras suposiciones, pero no allegó ningún medio probatorio que permitiera demostrar que el presunto afectado dejó de percibir una remuneración como consecuencia del hecho que se alega, pues aunque en el caso puede entenderse que el demandante tenía un ingreso por su trabajo, no se explica cuál fue el ingreso que dejó de percibir a causa del accidente, por lo que cualquier indemnización de este perjuicio, en el caso puntual, resultaría insostenible y exagerada.

- **Frente a los perjuicios de daño emergente**

Aunque los demandantes no realizan ningún tipo de solicitud al respecto, se debe dejar claro que de las pruebas acercadas al proceso se advierte que no existe prueba alguna de un detrimento que se pueda considerar de este tipo.

Al respecto, ha dicho el H. Consejo de Estado que:

(i). el daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad - para el afectado - de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. (...) necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega. (...)

Por tales motivos, ante la evidente falta de solicitud puntual y de soporte probatorio que permita determinar si existieron valores que fueron efectivamente pagados por la víctima a causa única y directa del daño alegado, no resulta procedente que se le reconozca tales perjuicios.

¹⁸ Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

- Frente a los perjuicios morales

La parte demandante solicitó a título de indemnización por los perjuicios morales las siguientes sumas:

- Kleyder Andres Morales Ceron (100 SMMLV)
- Anny Celeste Morales Gongora (100 SMMLV)
- David Alejandro Morales Gongora (100 SMMLV)
- Johan Andres Morales Rios (100 SMMLV)
- Leydi Pricila Gongora Ortiz (100 SMMLV)
- Hector Marino Morales Velasquez (Papá) (100 SMMLV)

Sobre dicha pretensión debe afirmarse que su tasación no puede derivarse de calificaciones subjetivas por parte del apoderado de los demandantes, sino que debe basarse en factores objetivos como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral emitido por la entidad correspondiente, es decir una Junta de Calificación de Invalidez, tal como lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014.

En este sentido, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales, valores evidentemente desproporcionados, pues como se adujo anteriormente, es pacífica la determinación del Consejo de Estado acerca de estos aspectos, y ha realizado una labor resaltable al determinar con detalle las sumas que pueden proceder en cada caso de reparación, por lo que era un deber del actor judicial el atender dichos parámetros.

En ese sentido ha dicho el órgano de cierre que para la reparación del daño moral en casos en los que se alega una lesión antijurídica producto de una acción u omisión de un agente del estado, puntualmente hablando de daños como lesiones físicas ocasionadas con ocasión de responsabilidad administrativa, los valores procedentes son los siguientes:

Tabla 2. Reparación del daño moral en caso de lesión

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1 Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	NIVEL 2 Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	NIVEL 3 Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	NIVEL 4 Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	NIVEL 5 Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Como vemos, son sumas ostensiblemente alejadas de la concepción de la parte demandante pues en gracia de discusión, debe decirse que incluso el togado accionante incurre en otra contradicción, pues en el capítulo de lucro vemos como manifiesta que conforme a las historias clínicas y un dictamen de medicina legal que no existe, se debe entender como porcentaje de pérdida de capacidad laboral el veinticinco por ciento (25%), véase:

PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y EDAD AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

Debido a que el señor Kleyder Andres Morales Ceron, se encuentra en proceso de calificación la pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Invalidez, se calcula un porcentaje de 25% de PCL de acuerdo con las historias clínicas y al dictamen de medicina legal.

En ese sentido lo coherente sería haber calculado los valores por perjuicio moral, con una pretensión máxima por cada demandante de 40 SMMLV, pero, contrario a ello, al momento de liquidar toma valores de referencia de una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y solicita en consecuencia 100 SMMLV, lo cual deja en evidencia la falta de técnica jurídica para la liquidación y la incongruencia con la que se establecen los valores pretendidos.

Habiéndose señalado lo anterior, debe dejarse claro que, al momento de esta contestación, la pérdida de capacidad laboral demostrada por la parte actora es cero (0), por lo que no podría ubicarse ni el directamente afectado, ni sus familiares, en ninguno de los rangos establecidos por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, motivo por el cual, los valores pretendidos resultan claramente exagerados y consecuencialmente improcedentes.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, al respecto dice Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez¹⁹:

*La lesión a la que se refiere la cláusula constitucional y legal es otra cosa, sin embargo. Para que exista lesión en sentido propio no basta que perjuicio exista un perjuicio material, una pérdida patrimonial; **es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea antijurídico, antijuridicidad en la que está el fundamento, como ya notamos, del surgimiento de la obligación reparatoria.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Y como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusivamente a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente al perjuicio de la pérdida de oportunidad**

La parte demandante solicitó a título de indemnización por pérdida de oportunidad, las siguientes

¹⁹ García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

sumas:

- Kleyder Andres Morales Ceron (100 SMMLV)
- Anny Celeste Morales Gongora (100 SMMLV)
- David Alejandro Morales Gongora (100 SMMLV)
- Johan Andres Morales Rios (100 SMMLV)
- Leydi Pricila Gongora Ortiz (100 SMMLV)
- Hector Marino Morales Velasquez (Papá) (100 SMMLV)

En relación con este tópico se debe indicar que desde la parte demandante no se acredita ni se desarrolla, inclusive, ni siquiera se sugiere, cuál es la oportunidad que cada uno de los mencionados perdió con las presuntas omisiones de mi poderdante, del Distrito de Santiago de Cali o de cualquiera de las otras entidades demandadas. En este sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado bajo el entendido que esta figura no puede convertirse en un mecanismo para declarar la responsabilidad de un demandado, en ausencia de la acreditación del nexo de causalidad, pues si es así, lo que procede es la exoneración de la responsabilidad.

Al respecto ha dicho el máximo órgano de la jurisdicción administrativa, en sentencia de Radicación: 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593) del 11 de agosto de 2010 con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez, que:

La pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio—material o inmaterial— para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.
(...)

Con el fin de precisar la noción de “pérdida de oportunidad” conviene identificar con la mayor claridad posible sus límites: así, de un lado, en caso de que el “chance” constituya en realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o frustrado es la oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen rubros distintos del daño. En consecuencia, la oportunidad difuminada como resultado del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la frustración de las probabilidades que se tenían de alcanzar el resultado anhelado, probabilidades que resultan sustantivas en sí mismas y, por contera, representativas de un valor económico incuestionable que será mayor, cuanto mayores hayan sido las probabilidades de conseguir el beneficio que se pretendía, habida consideración de las circunstancias fácticas de cada caso. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido es claro que la responsabilidad probatoria a cargo de la parte demandante no ha sido satisfecha en ningún sentido, pues como se advirtió al inicio de este aparte, el libelo petitorio

no hace referencia alguna a los mentados conceptos de “oportunidad” o “chance” que perdió cada uno de los demandantes, y en tal sentido no podemos apartarnos del precepto jurisprudencial al entender que si para éste, la situación alegada constituye una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable, es claro que la ausencia de determinación de dicha posibilidad, nos debe llevar a la misma conclusión lógica, es decir a que en el caso de autos estamos ante un “daño” que es meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable.

- **Frente al perjuicio a la vida en relación**

Los demandantes solicitan como indemnización de este perjuicio la suma de 100 SMMLV a favor de cada uno de los demandantes, así:

- Kleyder Andres Morales Ceron (100 SMMLV)
- Anny Celeste Morales Gongora (100 SMMLV)
- David Alejandro Morales Gongora (100 SMMLV)
- Johan Andres Morales Rios (100 SMMLV)
- Leydi Pricila Gongora Ortiz (100 SMMLV)
- Hector Marino Morales Velasquez (Papá) (100 SMMLV)

Frente a ello, se debe afirmar que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. En ese sentido el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 14 de septiembre de 2011 con Radicación No. 38222, dijo:

(...), cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. (...)”.

Así mismo, el daño a la salud es reconocido únicamente a la víctima directa y no a sus familiares, por lo que, se debe manifestar que consecuentemente, la indemnización solicitada, no es procedente en ningún sentido en este caso.

- **Frente a los perjuicios por daño a la salud**

La parte actora solicita que se reconozca en favor del señor Kleyder Andres Morales la suma de 100 SMMLV, por concepto de daño a la salud. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha definido el daño a la salud, así: “(...) se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la

existencia de certificación sobre la magnitud de la misma²⁰.

Ahora bien, respecto a la acreditación y liquidación de este tipo de perjuicio inmaterial, el Alto Tribunal ha afirmado lo siguiente:

*“La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, **única y exclusivamente para la víctima directa**, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:*

GRAFICO REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa
	SMLMV
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso²¹.

Como vemos, el daño a la salud también se reconoce dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión y, en la misma medida, atendiendo a criterios como los ya expuestos, esto es, afectaciones a la actividad rutinaria de la víctima directa que se pudiese acreditar con un dictamen de pérdida de

²⁰ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Rad. 28804 del 28 de agosto de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

²¹ Ibídem.

capacidad laboral, el cual no fue aportado al proceso, por lo que al momento de este escrito, no existe porcentaje de pérdida de capacidad laboral el cual se pueda cuantificar para liquidar, más allá de la inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la entidad demandada. En cualquier medida y sin que lo siguiente implique aceptación de responsabilidad alguna, se debe decir que conforme a los datos de la demanda en la que se indica que tienen la consideración de que la pérdida de capacidad laboral es del 25%, lo coherente hubiese sido liquidar la pretensión de este aspecto, en hasta 40 SMMLV, pero contrario a ello se solicita una suma exorbitante, incluso para lo que la parte demandante considera fue el daño en el caso. Así las cosas, en el asunto en concreto, resulta evidente que se presenta una cuantificación exagerada que desatiende la pacífica determinación del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, ya citado.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, para lo cual se pueden atender los criterios expuestos por Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez, ya citados²².

Como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto en el caso particular.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta sólo podrá ser reconocida a la víctima y deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusiva a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente a las pretensiones de condena directa a la aseguradora**

Debe reiterarse que tal solicitud desconoce la naturaleza del contrato de seguros, pues se debe tener en cuenta que al tratarse de un acuerdo sinalagmático que comporta la calidad de ser ley para las partes, se debe atender a sus estipulaciones para aplicarse a cada caso concreto, y debe resultar claro tanto para la parte actora como para el despacho, que incluso el hipotético caso de la declaración de responsabilidad administrativa de las demandadas, ello no implica *per se* una obligación de reparar para la aseguradora, toda vez que para que se dé esa situación, se deben cumplir las condiciones del contrato y atender sus características, como por ejemplo que exista cobertura temporal y material, o el hecho de que el pago opera en forma de reembolso, y el carácter meramente indemnizatorio, entre otras que se expondrán en el apartado relacionado al llamamiento en garantía en donde se profundizará en el contenido del contrato de seguro que sustenta la vinculación de las aseguradoras en este caso.

- **Frente a las pretensiones sobre intereses moratorios, condena en costas e indexación**

Dichas pretensiones relacionadas a la forma en la que se debe dar la liquidación de la indemnización

²² García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

o actualización de ella y de igual manera a los términos en los que en sentir de los actores se debe dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, lo mismo sólo tendría lugar en el escenario en que se decreten todas las solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* ello no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta coherente considerar procedentes estas solicitudes.

Pero además de ese análisis que resulta aplicable por las condiciones del caso, se debe tener en cuenta que materialmente resulta improcedente la solicitud, porque así lo ha considerado la jurisprudencia colombiana al tener que dirimir asuntos de este resorte. En tal sentido tenemos lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, quien en sentencia de 2021 ha dicho:

“(…) Ello se explica porque, a voces de artículo 1080 del Código de Comercio «El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad».

“(…) Ello se explica porque, a voces de artículo 1080 del Código de Comercio «El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad».

Pero como el precepto 1077 al que esa norma remite exige la acreditación de «la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere del caso», la indeterminación de esa «cuantía de la pérdida» para la fecha de formulación de las citadas demandas, impedía predicar mora alguna frente a QBE Seguros S.A., pues no se presentaba – en aquel entonces – el retraso en la ejecución de una prestación debida de la que aquella (la mora) depende.

*Teniendo en cuenta esas peculiaridades, y dado que, después de la integración del contradictorio, subsistía para la actora la incertidumbre de la pérdida y de sus alcances, **no resultaba viable reconocer réditos moratorios en una fecha anterior a la ejecutoria de la providencia, replicando así la solución que, de manera consciente, ha dado la jurisprudencia a eventos relacionados con prestaciones que no están plenamente determinadas antes de la intervención jurisdiccional.** Lo anterior en tanto que, como lo ha advertido insistentemente la Sala, “la falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la deudora se encuentre en mora de pagar la obligación, requisito éste que desde antaño exige la jurisprudencia de esta Corporación”²³. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En igual sentido ha dicho la misma corporación lo siguiente:

“...Sin embargo, el guarismo antes alcanzado deberá ajustarse en un doble sentido. Primero,

²³ Corte Suprema de Justicia SC-52172019

para excluir el porcentaje correspondiente al interés legal, por no haber sido objeto de pedimento y, aunque lo hubiera sido, porque su reconocimiento sólo procede en materia de obligaciones dinerarias, lo que únicamente se alcanzará con la sentencia de condena.

«La obligación de reparar, consistente en la satisfacción de una suma de dinero, sólo se hace exigible con la ejecutoria de la sentencia, de manera que es con posterioridad a ella que podrían computarse los créditos de mora, conforme al artículo 1617 del Código Civil²⁴» (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

A igual conclusión se llegó en sentencia reciente la Corte Suprema, cuando dice:

"Es evidente, pues, que no es apropiado confundir la mora del deudor con el daño que produce quien priva a otra persona de la disposición de su dinero, por cualquier acción u omisión constitutiva de responsabilidad extracontractual.

*Quien infiere un daño injusto a otro tiene el deber de repararlo, pero solo incurrirá en mora cuando ese deber se concrete en una prestación cierta, de contornos definidos. Es decir, con un monto exacto de indemnización ya fijado y una fecha para su pago, **lo que suele ocurrir sólo cuando se profiere el fallo que declara la responsabilidad**, o cuando las partes, autónomamente, resuelven sus conflictos a través de cualquier medio autocompositivo".* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

De las anteriores providencias, el profesor Andrés Orión en un blog de su autoría concluye lo siguiente:

*"Así las cosas, podemos afirmar que se cuenta con precedentes jurisprudenciales sólidos, uniformes y reiterados que sustentan con rigor jurídico la tesis que, en materia de las pólizas de responsabilidad civil, es improcedente el reconocimiento y pago de los intereses de mora a partir del mes siguiente de la reclamación, en tanto, **el derecho se cristaliza, repetimos, en este producto, con el pronunciamiento en sede judicial en firme**, pues su reconocimiento sólo procede en materia de obligaciones dinerarias caso en el cual estamos frente a una obligación clara, precisa, determinada (...)"* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Del anterior trasegar jurídico tanto en jurisprudencia como en doctrina, queda claro entonces que es improcedente la solicitud del demandante de que se liquiden los intereses moratorios a luces del artículo 1080 del Código de Comercio desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o desde la notificación del auto admisorio de la demanda, pues dichos intereses no se causan de manera automática y objetiva, sino que, por el contrario, deben ser valorados caso por caso y además la jurisprudencia ha dicho que dicha obligación a cargo de la aseguradora sólo se cristaliza en su cuantía (art. 1077 ibidem) con el fallo en firme que declara la responsabilidad del asegurado.

CAPÍTULO III. CONTESTACIÓN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, SC1256-2022, 27 de mayo del 2022

FRENTE AL HECHO PRIMERO: Es cierto.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: Es cierto.

FRENTE AL HECHO TERCERO: Es cierto. Aunque resulta ser una reiteración literal del hecho primero.

FRENTE AL HECHO CUARTO: Es cierto conforme se puede apreciar del auto que admite el llamamiento en garantía.

FRENTE AL HECHO QUINTO: No es cierto, pues la responsabilidad de responder patrimonialmente frente a una sentencia condenatoria dependerá del cumplimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza de seguro contratada.

II. PRONUNCIAMIENTO FRETE A LAS TÁCITAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo respecto de mi representada, pese a la evidente ausencia de responsabilidad de la entidad que realizó el llamado en torno a los hechos de la demanda, solicito que, sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna sino que por el contrario oposición, se verifique por parte de la señora Juez, circunstancias como: (i) límites y coberturas acordadas, y (ii) condiciones particulares de la Póliza y sus respectivas exclusiones, (iii) Coaseguro y la ausencia de solidaria, entre otras, en el evento remoto de que prosperen una o algunas de las pretensiones formulados por el apoderado en su libelo demandatorio.

CAPÍTULO IV. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN VIRTUD DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No. 1507222001226

En todo caso, si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a la vinculación de mi representada en virtud de la **Póliza de Responsabilidad No. 1507222001226**, pese a la evidente existencia de falta de demostración de la falla en el servicio, de la falta de estructuración del nexo causal, del hecho de un tercero y de la culpa exclusiva y determinante de la víctima como causas únicas del daño experimentado por el demandante; solicito, sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, sino que por el contrario con la intención de que la presente componga OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO; se verifique por parte del señor Juez, circunstancias como: **1)** inexigibilidad de la obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora al no haberse realizado el riesgo asegurado en la póliza, **2)** la eventual obligación de la compañía aseguradora no puede exceder el límite del valor asegurado en la póliza **3)** la responsabilidad de la aseguradora se circunscribe al porcentaje de participación conforme al coaseguro pactado, **4)** inexistencia de solidaridad, **5)** existencia de un deducible pactado en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507222001226, **6)** las exclusiones de amparo concertadas en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226, **7)** disponibilidad del valor asegurado, **8)** carácter meramente indemnizatorio de los contratos de seguros, **9)** el pago por reembolso, **10)** la ausencia de solidaridad entre mi mandante y el Distrito

Especial de Santiago de Cali; entre otras, en el remoto evento de que prosperen una o algunas de las pretensiones del llamamiento en garantía.

1. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA AL NO REALIZARSE EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Es preciso informar al despacho, que en el presente caso no existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada respecto de la **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226**, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado y amparado en el contrato de seguro.

En este sentido, el contrato de seguro solo entrará a operar sí y solo sí, el asegurado (Distrito de Santiago de Cali) es declarado patrimonialmente responsable por los presuntos daños que alega la parte demandante, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que impida los efectos jurídicos del contrato de seguro. Es así, como la declaratoria de responsabilidad civil constituirá el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado (artículo 1072 del Código de Comercio).

En igual sentido se pactó el objeto de la póliza en los siguientes términos, veamos:

1. Objeto del Seguro

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.

Al respecto, la parte demandante no ha demostrado los elementos constitutivos de la responsabilidad en cabeza del Distrito de Santiago de Cali, pues es claro que: i) no ha acreditado que la causa eficiente del accidente haya sido la supuesta omisión en el mantenimiento de la malla vial y/o en la señalización de ella, ii) como se ha explicado ampliamente a lo extenso de este escrito, hay una evidente culpa exclusiva de la víctima que es quién conduce el vehículo involucrado en el accidente, y que lo hace en desconocimiento de las normas de tránsito así como la existencia del hecho de un tercero, situaciones estas que generan un ineludible rompimiento del nexo de causalidad necesario para declarar la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada.

Por lo anterior, en razón a que no se ha demostrado la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali en la causación del daño y que, en todo caso, existe una causal de exoneración de la responsabilidad, solicito señor juez se declare probada esta excepción en cuanto no le asiste ninguna obligación a la compañía aseguradora, toda vez que no se ha realizado el riesgo asegurado.

2. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Sin que implique el reconocimiento de la responsabilidad, es necesario que el Juez observe las condiciones particulares y generales de la **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226**, dado que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece que el

asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 del mismo Código, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Para el caso concreto, el límite del valor asegurado pactado en la póliza para los casos de responsabilidad civil extracontractual es de \$7.000.000.000 pesos m/cte. Veamos:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 7.000.000.000,00	\$ 7.000.000.000,00

Dicho valor de \$7.000.000.000 pesos m/cte, se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que, es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de mi representada.

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Por lo anterior, señor juez, solicito se declare probada esta excepción.

3. LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE CIRCUNSCRIBE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONFORME AL COASEGURO PACTADO - INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD

Ahora, sin que siguiente aceptación de responsabilidad por parte de mi representada, es necesario precisar que, si llegaré a existir una condena en contra de la compañía aseguradora, el despacho deberá tener en cuenta que los riesgos fueron distribuidos entre diferentes aseguradoras, así:

PARTICIPACION DE COASEGURADORAS			
NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA	TIPO DE COASEGURO	%PARTICIPACION	\$ PRIMA PESO COLOMBIANO-S
AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES	CEDIDO	20,00%	\$ 188.846.575,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	CEDIDO	22,00%	\$ 207.731.232,94
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO	28,00%	\$ 264.385.205,56
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO	CEDIDO	30,00%	\$ 283.269.863,10

En ese sentido, existiendo la distribución del riesgo entre las compañías de seguros, debe tenerse en cuenta que en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada a los porcentajes antes señalados, pues no se puede predicar una solidaridad entre ellas.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual sostiene: *“en el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, **los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce***

nulidad”.

Lo estipulado en la norma en cita, se aplica al coaseguro por estipulación expresa del artículo 1095 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: **“las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”**.

Es así como las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje del riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe solidaridad legal ni contractual entre estas. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2021 con radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460) ha establecido lo siguiente:

(...) 18.1.- En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio: La jurisprudencia ha reconocido que en estos casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente. De hecho, ha indicado que en esos casos de coaseguro.²⁵ (Negrillas fuera del texto).

En consecuencia, al momento de resolver lo concerniente a mi procurada y en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar a su cargo, deberá tenerse en cuenta que la póliza de seguro antes referida fue tomada en coaseguro. En virtud de lo anterior, es claro que mi procurada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

Siendo así, resulta necesario aclarar que entre las coaseguradoras no existe solidaridad en la acreencia eventual por la pasiva, así lo ha entendido el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de enero del 2022, en la que afirmó lo siguiente:

Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas, de modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la vinculación del coasegurador Colpatria SA al trámite administrativo e imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud, carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control, con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo S.A. para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la comparecencia del coasegurador.²⁶

²⁵ Sentencia del 9 de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460).

²⁶ Sentencia del 26 de enero de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 25000232600020110122201 (50.698).

Es claro entonces que mi representada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

En virtud de lo anterior, solicito se tenga en cuenta el porcentaje del veintiocho por ciento (28%) asumido por **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** como la proporción de riesgo a su cargo, en el eventual e improbable escenario en el que el despacho considere que se debe asignar responsabilidad de indemnizar a las compañías citadas al litigio, dadas las consideraciones expuestas relativas a la obligación distribuida en forma de coaseguro para las compañías aseguradoras.

4. EXISTENCIA DE UN DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1507222001226

Es preciso informar al despacho, sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna, que, en el improbable caso que se decidiera afectar el contrato de seguro expedido por mi procurada, en el mismo se pactó un deducible, el cual se traduce en una porción del siniestro que en todo caso debe ser asumido por cuenta propia del asegurado, es decir, en este caso por el Distrito Especial de Santiago de Cali.

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 7.000.000.000,00	5% PERD Min 3 (SMMLV) VAP No Inferior a 3 SMMLV

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia frente al tema del deducible ha dicho:

Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.

En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado "...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño".

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre

*otros factores.*²⁷

De esta manera, en la **Póliza No. 1507222001226** se pactó un deducible para el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, el cual es del **5% del valor de la pérdida o mínimo 3 SMMLV, VAP no inferior a 3 SMMLV**, por lo que, al momento de proferir una eventual sentencia condenatoria en contra del asegurado y optarse por afectar el contrato de seguro, deberá tenerse en cuenta el deducible pactado.

En virtud de lo anterior, solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

5. LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1507222001226

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”²⁸

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la **póliza de responsabilidad civil No. 1507222001226** cuya vigencia corrió desde el **30 de abril de 2022 hasta el 01 de diciembre 2022**, en su página 1 y siguientes señala la obligación de las partes de atender una serie de exclusiones contempladas en el clausulado general depositado por la aseguradora en la Superintendencia Financiera, tal como se ve a continuación:

12. Riesgos excluidos

En materia de riesgos excluidos el DISTRITO de Santiago de Cali acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso y la Exclusión por COVID-19. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

Ahora bien, dentro del contenido del documento en comento, entiéndase, el clausulado general, se encuentra numerada como exclusión, la siguiente: **“2.1.12: Daños a causa de la inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales, a no ser**

²⁷ Concepto 2019098264 ago. 29/2019, Superintendencia Financiera de Colombia.

²⁸ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020

que ni el asegurado ni personas con funciones directivas hayan actuado dolosamente ni hayan permitido una actuación dolosa de los demás empleados.” Por tal motivo solicito respetuosamente aplicar ésta última exclusión expresamente al caso concreto.

Por otro lado, si bien la Circular Básica Jurídica establece que las exclusiones deben constar en la primera página de la póliza y en caracteres destacados, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023 ha aclarado que lo necesario es que deban empezar en la primera página de la póliza, más no de su carátula, y en caracteres destacados para que tengan eficacia. Criterios que se cumplen dentro del proceso, pues las exclusiones se encuentran desde la primera página del condicionado en caracteres destacados de forma ininterrumpida. Lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

*Artículo 184. Régimen de pólizas y tarifas. (...) 2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y c. **Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original).*

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil mediante la Sentencia de Unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023, señaló que:

Ahora bien, con el propósito de aquilatar la hermenéutica de la norma en cuestión, debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1046 del Código de Comercio, se denomina póliza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta póliza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la carátula, en la que se consignan las condiciones particulares del artículo 1047 ibídem y las advertencias de mora establecidas en los cánones 1068 y 1152 del mismo Código; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los términos del artículo 1048 ejusdem. En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la carátula de la póliza de la póliza misma, y que, dada esa distinción, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos básicos y las exclusiones, «en caracteres destacados» en la referida carátula. Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es a partir de allí donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado.

Conforme a lo anterior, las exclusiones son eficaces siempre que consten en caracteres destacados y comiencen a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza, tal y como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia; exigencia que se cumple en el caso de marras, toda vez que las exclusiones fueron estipuladas a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza.

Sobre la ubicación de las exclusiones pactadas en el instrumento asegurativo, en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

*1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros: Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información: 1.2.1.1. En la carátula: 1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co. 1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal. 1.2.1.2. **A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones) Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza.** Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral. (Negrillas fuera de texto original)*

En ese sentido, la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de esta, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superintendencia a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros), conceptuando lo siguiente:

Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad, es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse la exclusión arriba señalada o alguna de las exclusiones de las que constan en las condiciones generales y particulares de la **póliza de responsabilidad civil No. 1507222001226 cuya vigencia corrió desde el 30 de abril de 2022 hasta el 01 de diciembre 2022**, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

En los anteriores términos, solicito señor juez declarar probada esta excepción.

6. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prolijada.

7. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. Siendo así, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Por lo anterior, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia No. 5065 del 22 de julio de 1999, estableció lo siguiente:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el

*asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.*²⁹

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: **“respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”.** (Negrillas fuera del texto original)

Así las cosas, no debe perderse de vista que las pretensiones de la parte actora no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte del ente territorial que no tiene origen en una obligación legal o contractual.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el *petitum* de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciéndola.

En los anteriores términos solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

8. PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable operador judicial que, en el improbable caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena.

Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, sino por reembolso o reintegro.

9. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el

²⁹ Sentencia No. 5065. (22 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Nicolás Bechara Simancas.

límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las mismas.

Por lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

10. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la ley o en el contrato de seguro expedido por mi procurada, incluida la de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 282 del Código General del Proceso que establece “(...) *Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes (...)*”.

En este sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá declararse de manera oficiosa por el despacho en la sentencia que defina el mérito.

CAPÍTULO V. OPOSICIÓN PROBATORIA

1. INTERVENCIÓN EN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación a la demanda.

2. FRENTE AL INTERROGATORIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Me opongo al interrogatorio del representante legal del Distrito de Especial de Santiago de Cali, con sustento en lo preceptuado en el artículo 195 del Código General del Proceso que establece que “*no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas*”, contenido que es aplicable al caso por remisión expresa del artículo del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior señor juez, solicito se rechace esta prueba por inconducente.

3. FRENTE AL INTERROGATORIO DE PARTE DE KLEYDER ANDRÉS MORALES CERÓN, LEYDI PRICILA GÓNGORA ORTIZ Y HÉCTOR MARINO MORALES VELÁSQUEZ

Me opongo a esta solicitud probatoria en el entendido de que se solicita la comparecencia de los referidos sin hacerse una precisión sobre el motivo de su participación en el proceso, véase que en la solicitud se dice “a efecto de que respondan las preguntas que le formularé para que aclaren, precisen o informen sobre los hechos y en general sobre todo lo que sea relevante para el proceso” sin embargo, vemos que ello implicaría que se solicitan los interrogatorios a fines de demostrar las manifestaciones de la demanda.

En ese contexto es necesario reiterar al despacho que la declaración de la parte *per se* no prueba los hechos, y que el artículo 198 del Código General del Proceso es claro en indicar que el juez podrá solicitar la comparecencia de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos, sin embargo, la norma no faculta a las partes a solicitar su propia declaración.

Así lo ha corroborado el Consejo de Estado en decisión del 04 de abril de 2022, respecto del caso con radicación 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) en el que resolvió un recurso de reposición sobre un auto que negó una declaración de parte solicitada por los demandados. En tal providencia el órgano de cierre manifestó que:

*A diferencia de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo 198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. **Esta norma no faculta a las partes a solicitar su propia declaración.** El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes, bien sea porque de oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita. Son dos puntos de partida distintos. Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden solicitar la citación de la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la citación de las partes. Esta norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de las partes ordenado por el juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda, no tiene una contraparte en el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo. De ahí que, permitir que la misma parte solicite su declaración, no tiene en cuenta lo previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a una interpretación armónica de esta norma (artículo 30 CC).*

*Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, **es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas.** Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En tal sentido es claro que no es procedente la solicitud del interrogatorio de parte realizada por el actor, en tanto resultaría una prueba inútil, pues dicha declaración por sí sola no tiene la entidad de demostrar los hechos de la demanda, y si la solicitud se hace para referirse a tales hechos, ello resulta superfluo, pues se entiende que lo expresado en la demanda procede de la declaración del

demandante. Motivos por los cuales, resulta improcedente la solicitud.

4. RATIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN LABORAL

Con fundamento en lo contenido en el artículo 262 del Código General del Proceso me permito solicitar respetuosamente, que se realice por la parte accionante la ratificación de la constancia suscrita por la señora Nathalia Colmenares Torres como Coordinadora de talento Humano (o quien haga sus veces) de Grupo Proyectos Especiales S.A.S, la cual ha sido allegada como medio probatorio en el escrito genitor. Esta solicitud entonces se realiza con miras a determinar la validez y autenticidad del documento y/o cualquier otro aspecto que pueda ser de utilidad para dirimir la controversia suscitada en este caso.

5. FRENTE A LA INVERSIÓN DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

La parte demandante solicita que se invierta la carga de la prueba considerando que las demandadas se encuentran en una posición más favorable para demostrar lo hechos del litigio. Al respecto, me opongo rotundamente en cuanto al Distrito de Santiago de Cali y la compañía aseguradora, pues no se cumplen los requisitos para invertir la carga de la prueba, toda vez que: i) los demandados no tienen mejor cercanía al material probatorio, ii) no tienen en su poder el objeto de la prueba, iii) no intervinieron directamente en los hechos, iv) la contraparte no se encuentra en un estado de indefensión o incapacidad y v) este caso debe ser analizado bajo un régimen subjetivo de responsabilidad.

Para el caso concreto ocurre todo lo contrario, pues la parte demandante es la única que, por su cercanía con los hechos, puede probar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, ya que fue la única que los presenció y presuntamente los sufrió. Así mismo, la parte actora solicita la declaratoria de la falla del servicio, la cual, pertenece por excelencia al régimen de tipo subjetivo de responsabilidad y, por ende, le corresponde a la parte interesada probar el hecho generador, el nexo causal y el daño.

En este sentido, no le asiste al demandante razón jurídica alguna para que el despacho acceda a la inversión de la carga de la prueba, máxime cuando en este tipo de casos de accidentes de tránsito por supuestas deficiencias en la vía, se ha consolidado jurisprudencialmente la postura de que le corresponde al interesado probar que dicha deficiencia, en este caso la presunta falta de señalización del reductor de velocidad en la vía, fue la causa eficiente del accidente para que así exista la posibilidad de declarar la responsabilidad.

Por lo anterior es claro que la solicitud de la parte actora atiende más a su imposibilidad de acreditar los elementos de la responsabilidad extracontractual, que al hecho de que se esté en alguna de las causales del artículo 167 del Código General del Proceso y por ello debe ser negada.

6. FRENTE A LA SOLICITUD DE ALLEGAR DICTÁMENES PERICIALES

Me opongo a que se permita allegar a la parte actora dictámenes periciales por fuera de la etapa procesa que dispone la ley para ello, con fundamento en lo contenido en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues si bien dicha norma contempla la posibilidad de anunciar la pericia y aportarla en el término que el juez confiera, lo cierto es que ese supuesto de hecho no se cumple

para el caso en concreto, pues como bien se indica en el escrito genitor, la parte actora no aportó los dictámenes periciales “por falta de recursos económicos” más no por insuficiencia del término como lo exige la norma. Sobre lo que pretenden hacer los demandantes de anunciar los dictámenes periciales de reconstrucción del accidente y de pérdida de capacidad laboral, el profesor Hernán Fabio López Blanco dice lo siguiente:

"... norma que estimo no tiene aplicación respecto de quien lo va a aportar con la demanda, debido a que parte la disposición del supuesto de insuficiencia del término previsto, lo que no se predica para la demanda, de ahí que asevero, que, salvo un caso de excepción, siempre con la demanda inicial debe ser aportado dictamen.³⁰"

Y frente a la excepción que menciona en esa cita el profesor López Blanco dice en el pie de página No. 7 de la pág. 376 lo siguiente:

"Sería la hipótesis de que esté a punto de estructurarse un plazo de prescripción y la única forma que subsista de interrumpirlo, pues ya se agotó el del requerimiento directo de que trata el art. 94 inciso final del CGP, sea el de presentar la demanda."

Entonces, aquí es claro que el artículo 227 del Código General del Proceso **NO** contempló la posibilidad de anunciar un dictamen pericial cuando la parte no tuviera dinero para su contratación y/o realización, para luego aportarlo, lo que se contempló fue dicha posibilidad (de aportarlo con posterioridad) en casos donde el término fuese insuficiente para la contratación y realización de la pericia, circunstancia que no sucede en el caso de autos, pues los demandantes todavía tenían un término holgado de caducidad y podían desplegar otras gestiones para la consecución del dictamen.

En resumen, la facultad de anunciar un peritaje sólo está consagrada para el supuesto de hecho en que el término previsto sea insuficiente, lo que no sucede aquí y por ello debe denegarse la posibilidad de arrimarlo al proceso con posterioridad a la etapa definida para ello.

CAPÍTULO VI. PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226.
2. Condicionado general No. 040212-1326-P-06-00000VTE390-ABR/12.
3. Certificado de Póliza No. 55391 anexos 0, 3 y 4 expedido por **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva a los señores Kleyder Andrés Morales Cerón, Leydi Pricila Góngora Ortiz y Héctor Marino Morales Velásquez, con la intención de que den respuesta a un cuestionario que le formularé verbalmente en la diligencia, con relación a las situaciones de hecho que motivaron la presente demanda.

³⁰ (López Blanco, H. F. (2019). Código General del Proceso. Pruebas. DUPRE Editores Ltda. Págs. 375 y 376)

TESTIMONIALES

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva al agente de tránsito de placa No. 205, el señor **Alberto Salazar Restrepo**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. **16.760.938**, domiciliado en la ciudad de Cali, dirección de la Secretaria de Movilidad y Tránsito de Cali, que se ubica en la carrera 3 No. 56 - 30, Cali, Valle, quien puede ser citado a través del de la entidad, para que declare lo que le consta acerca de lo contenido en el Informe policial de accidente de tránsito No. A001522937 elaborado el 27 de septiembre de 2022, toda vez que el referido fue el agente de tránsito encargado de elaborar el informe en cuestión.

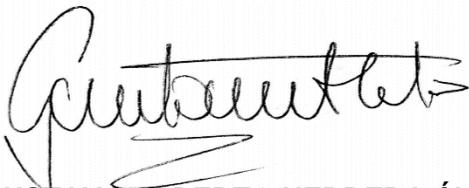
CAPÍTULO V. ANEXOS

1. Escritura Pública con poder general de representación a mí conferido.
2. Certificado de existencia y representación legal de mi representada expedido por la Cámara de Comercio de Cali.
3. Certificado de existencia expedido por la Superintendencia Financiera.
4. Documento de identidad y tarjeta profesional del suscrito apoderado.

CAPÍTULO VI. NOTIFICACIONES

Mi poderdante y el suscrito recibiremos notificaciones en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No.19.395.114 de Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C.S. J.